

El Gobierno de Luis Herrera LA MISERIA DE LA ECONOMIA

Domingo Méndez R.

Luego de haber recorrido —a través de diversas lecturas— lo que han sido los cinco años de gobierno de Luis Herrera Campins en materia económica, se tiene la impresión de estar ante el primer caso en que es tan fácil, para la economía, predecir el resultado final de una serie de políticas y se es, a la vez, tan certero. Quizás por primera vez en la historia haya quedado desmentido aquello de que “los economistas pasan seis meses elaborando predicciones y los siguientes seis meses explicando por qué no acertaron”. Una anécdota ocurrida a quien esto escribe puede probar que no exageramos.

En aquellos esperanzados meses de 1979 me encontraba en los preparativos finales de la tesis de grado. El tutor de dicha tesis había sido nombrado recientemente asesor jefe del Ministerio de Hacienda. En una de mis consultas, luego de haber discutido sobre el esquema final de la tesis, nos quedamos charlando amigablemente. De pronto me fijé en dos series de papelógrafos que estaban en la oficina. En ellos identifiqué gráficos, curvas, ecuaciones y proyecciones econométricas. Leí recetas monetaristas montadas a la fuerza sobre un “modelo keynesiano completo” —liberación de precios, reducción del circulante, reducción de aranceles, etc.—, recordé las clases de macroeconomía y teoría monetaria en las que salía tan mal parado el modelo de Milton Friedman y los Chicago boys —certeramente llamado modelo de la “ecuación perdida”— y pregunté tímidamente: “¿Todo esto no va a conducir a una stagflation?” Hasta entonces, como todavía no habíamos experimentado en carne propia lo que significaba eso, no habíamos acuñado el barbarismo de estancaflación, es decir, inflación y desempleo, al mismo tiempo y en el mismo lugar.

Lo certero de aquella pregunta no se debió a una brillantez del autor, que de ninguna manera posee, sino que a cualquier estudiante de economía —incluidos los de los primeros años— le resultaba evidente lo que iba a pasar. Esta sorprendente “capacidad predictiva de la ciencia económica” no hace sino ornar debidamente dramático lo ocurrido en estos últimos cinco años. No sólo el dramático el costo social de las políti-

cas del gobierno de Luis Herrera Campins sino la miseria de una ciencia que vio venir esos males y que tan sólo se limitó a dar cuenta de ellos.

Veamos cómo se sucedieron los hechos.

LOS INICIOS DEL GOBIERNO

Al asumir el poder el nuevo gobierno en 1979, Venezuela atravesaba por una fase inflacionaria sin precedentes —12 por ciento en ese año, que luego se extendió a 21,6 por ciento en 1981— que contrastaba con una tasa de desempleo sumamente baja.(1)

Consideró el gobierno que no se podía seguir al ritmo de crecimiento brutal que la economía había experimentado a partir del alza de los precios petroleros de 1973 y que permitió la formulación de un V Plan de desarrollo “faraónico”. La economía venezolana estaba “recalentada” y había que desacelerarla.

Dos medidas de política económica pretendían corregir tal situación. La liberación de precios y la reducción del dinero circulante en la economía.

La justificación técnico-ideológica de dichas medidas fue la siguiente: “la inflación es el mayor enemigo político de los gobiernos de la región por cuanto frena el desarrollo económico y deteriora el nivel de vida de las clases medias y trabajadoras”. Las dos medidas antes mencionadas iban pues destinadas a atacar este flagelo.

En primer lugar la reducción del circulante. Para 1979 se tenía la falsa impresión —hoy por hoy es la dominante— de que nuestra inflación era de tipo monetario, es decir, que se debía fundamentalmente a un desproporcionado aumento del dinero circulante respecto a nuestra capacidad de producir bienes y servicios, por lo cual dicho aumento se traducía en aumento de precios e importaciones.(2) En conclusión: la reducción del circulante bajaría la inflación, lubricaría el desarrollo económico y evitaría que se siguiera deteriorando el nivel de vida de los “pobres”. Silogismo perfecto.

En segundo lugar la liberación de precios. Aquí los argumentos fueron un tanto más sofisticados. Se trataba de generar condiciones de competencia más ágiles en la sobreprotegida industria ve-

nezolana. Dicha competencia haría que sobreviviesen las más eficientes, es decir, aquellas empresas que lograron aumentos significativos de productividad, lo cual, además de “sincerar la economía”, incidiría a la larga sobre los niveles de inflación por la vía del aumento en la calidad y cantidad de los productos.

Esta bella construcción teórica comenzó a caer de bruces en pocos meses ante los embates de la realidad. A grandes rasgos la estructura económica venezolana está signada, por lo que toca al sector privado, por una alta concentración en los sectores comercial y financiero; fuerte dependencia —a través de diversas vías— del Estado; estructura oligopólica y monopólica de esos capitales, es decir, muchas empresas del mismo ramo concentradas en pocas manos o en una sola.

Tal conformación del capitalismo privado determinaba una escasa flexibilidad para lanzarse a un esfuerzo productivo y competitivo que respondiere a las nuevas reglas de juego. Ciertamente la competencia la resistieron las más eficientes, que en nuestro caso son los grandes grupos económicos que poseen sus propias fuentes de financiamiento —son dueños de bancos—, lo cual les otorga un margen para soportar períodos prolongados de baja liquidez sin verse obligados a un esfuerzo competitivo que les permita obtener liquidez por otras vías y viceversa. Los “menos” eficientes fueron en nuestro caso la pequeña y mediana industria que requería financiamiento externo para capital de trabajo. La situación de baja liquidez fue estrangulante para este subsector de la empresa privada que comenzó a cerrar sus puertas.

Las consecuencias del choque política-estructura no se hicieron esperar. Comenzó el ciclo: baja liquidez - estrangulamiento de empresas medianas y pequeñas - desempleo - reducción de la demanda agregada - estrechamiento de la liquidez por la vía del beneficio de las ventas - más desempleo. Cuando el gobierno quiso corregir el rumbo ya la economía estaba sumida en la recesión.

A estas alturas uno se pregunta cómo pudieron ser tan ingenuos los miembros del gabinete económico de Luis Herrera. Por ello se impone un alto

en el curso cronológico de los acontecimientos. Veremos que no hubo tal ingenuidad.

LOS BENEFICIARIOS DE LA POLÍTICA ECONOMICA

Este tema merecería un artículo por sí mismo. Si algo han permitido conocer estos últimos cinco años es la inmadurez e irracionalidad del empresario privado venezolano. Veámoslo.

Los beneficiarios de esta política económica fueron sin lugar a dudas los grandes grupos económicos. La vía de realización del beneficio ofrecida por la política económica del gobierno era la de "capear el temporal" con sus propias fuentes de financiamiento y luego absorber el vacío de mercado provocado por la quiebra de las empresas medianas y pequeñas, con lo cual consolidarían, a mediano y largo plazo, su posición oligopolítica y monopólica. Esta puerta sigue estando abierta y no dudamos de que se realice. Pero la avidez de ganancia fácil y la dependencia —incluso psicológica— del Estado los llevó al terreno de lo irracional.

El gobierno no logró convencer al capitalismo privado de que sus medidas, lejos de favorecer a los pobres, iban directamente en su beneficio. Recuérdese que, a pesar de la clara orientación de las medidas iniciales, las eternas peleas entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y la lentitud en formular el VI Plan de la Nación(3) fomentó un clima de confusión y desconfianza tal, que la empresa privada optó por la salida más beneficiosa a corto plazo pero peligrosa a largo plazo: sacar sus capitales al exterior. Salida peligrosa, porque introdujo un elemento desestabilizador al interior del país y puso al gobierno en condiciones más desventajosas para negociar con los bancos acreedores, lo cual condujo finalmente a que se nos impusiera la mediación del Fondo Monetario Internacional. Salida peligrosa, porque las condiciones para el refinanciamiento, impuestas por el FMI, de ser aceptadas en su totalidad, barrerían con buena parte de esa burguesía que aún cree haber hecho el negocio del siglo.

EL DESENLACE DE UN INTENTO FALLIDO

El año 1982 estuvo signado desde su mismo comienzo por signos de alarma y voces que lo acompañaban. Para entonces el desempleo ya era considerable y con tendencia a crecer más, y, si bien la inflación daba muestras de ceder, el costo social era demasiado alto. No



decrecía por mayor productividad sino por contracción de la demanda (léase empobrecimiento de la población).

En tal situación, la baja de los precios petroleros en marzo de 1982 fue un factor que vino a aumentar el clima de desconfianza y confusión y que dio el espaldarazo definitivo al proceso de fuga de capitales.

La fuga de divisas fue con mucho el hecho más resaltante de 1982. Se han señalado por lo menos cuatro factores que movían a pensar en la necesidad de que más temprano que tarde se modificara el sistema cambiario venezolano, bien mediante control de cambios o bien mediante la devaluación del bolívar. En efecto, el bolívar estaba sobrevaluado respecto al dólar: en primer lugar, por el carácter rentista de nuestra economía; en segundo lugar, las alzas de los precios petroleros de 1979 y 1981 obedecían a hechos fortuitos y por lo tanto la afluencia de dólares a la economía venezolana era de carácter meramente coyuntural, coyuntura que se esfumaría una vez retornara el mercado petrolero a sus niveles de equilibrio; en tercer lugar, el dólar se había estado revalorizando en los mercados europeos, con lo cual, al mantenerse fijo el tipo de cambio del bolívar, éste se revaluaba automáticamente frente a las monedas europeas y japonesa sin relación alguna con lo que pasaba al interior de nuestra economía. A estos factores vino a agregarse un cuarto elemento proveniente de la política económica del gobierno. Durante mucho tiempo las tasas de interés internas estuvieron artificialmente bajas en comparación con las tasas preva-

cientes en USA, lo cual en medio de una economía en recesión era un estimulante para la salida de capitales. Cuando este elemento fue detectado y cuestionado, la respuesta del presidente del Banco Central fue que esta fuga de capitales coadyuvaba a la política económica de reducción del circulante (!!).

Pero no nos engañemos, la existencia real de todos estos elementos no justifica el proceso de fuga de divisas, tan sólo lo explica. Fue irresponsabilidad del gobierno no hacerse cargo de estos elementos y poner los correctivos necesarios a tiempo y fue irracional de parte de los empresarios venezolanos —dígase lo que se diga acerca de la "lógica interna del sistema capitalista"— iniciar un proceso de fuga de divisas que por momentos apuntó deliberadamente a forzar una devaluación. Fue finalmente en Febrero de 1983 cuando en forma traumática y ambigua se puso fin a la fuga de divisas.

Si la fuga de divisas fue el tema de 1982, la renegociación de la deuda externa lo fue en 1983. Lo que lo hizo un tema relevante es que hoy por hoy y a pesar de los éxitos parciales en la gestión renegociadora, el futuro económico del país pende de estas mismas gestiones, ni más ni menos.

Dada la recesión económica por la que ha estado atravesando el país y el creciente deterioro de su equilibrio externo (baja en los precios petroleros y fuga de divisas), por una parte, y, por la otra, la recesión del mundo industrializado y los problemas de pagos internacionales de los países del Tercer Mundo y en especial América Latina, los bancos acreedores prefirieron "curarse en salud" imponiéndole a Venezuela la mediación del Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda. Las condiciones propuestas por el FMI para dar su visto bueno a la renegociación son ambiguas. Ciertamente algunas de ellas son razonables, pero en líneas generales implican la implementación de medidas económicas del mismo tipo de los impuestos por Luis Herrera Campíns al comienzo de su mandato y de cuyos resultados ya hemos hablado. No obstante, hay que señalar los éxitos parciales del gobierno en la gestión renegociadora. No sólo han sido las moratorias parciales que han proporcionado un margen de tiempo que permite madurar una contrapropuesta acertada y que traslade la renegociación fuera del contexto extraordinario del período electoral. También es cierto que hoy por hoy existen probabilidades altas de

renegociar directamente con los bancos acreedores sin la mediación del FMI y esto significa que en cualquier caso habrá un margen mayor para evitar la imposición de políticas económicas en contra de los intereses del país.

Un elemento que vino a agregarse a las gestiones renegociadoras y que no ha hecho otra cosa más que "enturbiar las aguas" es la pretensión del sector privado venezolano de que se les otorguen dólares preferenciales para el pago de su deuda externa y se renegocie conjuntamente con la deuda pública. No dudamos de que haya empresas medianas y pequeñas justificadamente necesitadas de tal trato; pero el grueso en divisas y negocios está en quienes sacaron sus capitales al exterior. Además de que es físicamente imposible para el país atender a las solicitudes de la empresa privada, el hecho de hacer concesiones consumaría el más grande robo a la nación por parte del empresariado criollo.

Un último punto que llama la atención en torno a la deuda pública venezolana es por qué creció en forma tan desmesurada entre 1979 y 1984. La pregunta no es ociosa, puesto que desde el comienzo de su mandato Luis Herrera Campíns habló de un país hipotecado y por otra parte a su mandato corresponden los más elevados ingresos petroleros de la historia del país. Dos variables responden, a nuestra manera de ver, a la pregunta. En primer lugar, la necesidad de financiar capital de trabajo o inversiones nuevas en los proyectos sin concluir o sin haber llegado a su fase de madurez, iniciadas en el período anterior. Pero más grave, pensamos que el grueso del endeudamiento ha tenido que ver con la necesidad de financiar pérdidas de las empresas del Estado y el desorden administrativo en lo tocante a la contratación de empréstitos por parte de los entes públicos descentralizados.(4)

PIERRE DEL BALANCE

El año 1984 se abre para Venezuela con un elevado nivel de desempleo que oscila, según se sea más o menos optimista, entre un 15 y un 20 por ciento de la fuerza activa del trabajo. Con una tasa de inflación ciertamente reducida (menos del 10 por ciento), pero a un costo social enorme y con grandes probabilidades de desatarse en cualquier momento. Con una deuda enorme por renegociar y de cuya gestión depende buena parte del futuro económico del país. A lo anterior hay que agregar que la recesión venezolana ya no es debida

solamente a factores subjetivos como la desconfianza, sino que su dinámica real en estos momentos es de recesión, haya o no desconfianza y pesimismo. Recuérdese que la ruptura en la política económica del gobierno luego de la salida del ministro Ugueto no logró cambiar de signo la dinámica de la economía. Por lo tanto no sólo tendrá el nuevo gobierno que hacer un giro de 180 grados respecto a la política económica de Ugueto sino que tendrá que ir más allá del giro impuesto por el ministro Sosa.

Todo esto se vio con antelación, como señalamos al comienzo de este artículo. No faltaron desde artículos y ensayos hasta estudios rigurosos que lo previeron, que advirtieron de los costos sociales y políticos de lo que se estaba haciendo. Y de todas maneras sucedió. ¿Cuál es el papel entonces de los intelectuales —en este caso los economistas— en una sociedad como la venezolana? Por lo pronto, uno comprende la sensación de "estar de más" y en el mismo bando que los enemigos del pueblo cuando se conversa en un barrio

de Caracas o del interior del país sobre lo que sucede con la economía venezolana.

NOTAS

- (1) Todas las cifras relacionadas con lo dicho en este artículo son asequibles a través de los artículos de SIC sobre estos mismos temas desde 1979. Por lo demás dichos temas son tratados allí con más detalle que en el presente artículo.
- (2) Una excelente refutación de la tesis monetarista sobre nuestra inflación se encuentra en dos artículos, publicados en esta misma revista, de M. Ignacio Purroy en los números 459 y 460 pp. 390 y 440 respectivamente.
- (3) La tesis de que lo que paralizó a la industria privada venezolana fue la no formulación del VI Plan de la Nación —entre otras variables— que dejó a este sector en ausencia de directrices relativas a la reorientación de sus inversiones es expuesto por Eduardo Mayobre en su artículo "Los diversos rostros de la recesión", publicado por Pensamiento Iberoamericano No. 4, pp. 133 y sigs.
- (4) Cfr. SIC, No. 458, pp. 343.

